



**JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD
DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, D. C.
SECCIÓN SEGUNDA**

Bogotá D. C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil dieciocho (2018)

RADICADO:	11001-33-35-026-2018-00360-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	JOSÉ MIGUEL MONROY GARZÓN
DEMANDADO:	NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN- FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

JOSÉ MIGUEL MONROY GARZÓN, por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la **NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN- FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO**, con el objeto de obtener la nulidad, de los siguientes actos administrativos:

- “1. Declara LA EXISTENCIA del acto ficto o presunto configurado el 29 DE ABRIL DE 2018, frente a la petición radicada el 29 DE ENERO DE 2018 con relación al reconocimiento y pago de la sanción moratoria en el pago de las cesantías, toda que la misma no fue contestada por parte de la demandada Ministerio de Educación Nacional- Fonpremag.*
- 2. Declara la nulidad del acto ficto o presunto configurado el día 29 DE ABRIL DE 2018, frente a la petición radicada el 29 DE ENERO DE 2018, en cuanto negó el derecho a pagar la SANCIÓN POR MORA a mi mandante establecida en la Ley 244 de 1995 y Ley 1071 de 2006, equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo, contados desde los Setenta (70) días hábiles después de haber radicado la solicitud de la cesantía ante la demandada y hasta cuando se hizo efectivo el pago de la misma.*
- 3. Declarar que mi representado tiene derecho a que la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL- FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, le reconozca y pague la SANCIÓN POR MORA establecida en la Ley 244 de 1995 y Ley 1071 del 2006, equivalente a un día de su salario por cada día de retardo, contados desde los setenta (70) días hábiles después de haber radicado la solicitud de la cesantía ante la entidad y hasta cuando se hizo efectivo el pago de la misma”*

Analizada la integridad de la demanda, y los demás documentos aportados a la actuación, se observa que en torno al presupuesto procesal del juez competente, no es posible avocar el conocimiento del medio de control, de conformidad con las siguientes,

CONSIDERACIONES

1. De la estimación razonada de la cuantía

El artículo 155 de la ley 1437 de 2011, señala los asuntos sobre los cuales tienen competencia los Juzgados Administrativos en primera instancia,

refiriéndose en el numeral 2° específicamente a los de carácter laboral, preceptuando lo siguiente:

“Artículo 155. Competencia de los jueces administrativos en primera instancia. Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(...)

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (...)

(Negrilla fuera de texto)

Adicionalmente al definir nuestro legislador la competencia en razón de la cuantía determinó unas condiciones especiales para su fijación, en efecto establece la norma:

“Artículo 157. Competencia por razón de la cuantía. Para efectos de competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen. En asuntos de carácter tributario, la cuantía se establecerá por el valor de la suma discutida por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones.

Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor.

En las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho no podrá prescindirse de la estimación razonada de la cuantía, so pretexto de renunciar al restablecimiento.

La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella.

Cuando se reclame el pago de prestaciones periódicas de término indefinido, como pensiones, la cuantía se determinará por el valor de lo que se pretenda por tal concepto desde cuando se causaron y hasta la presentación de la demanda, sin pasar de tres (3) años.”

Pues bien, el apoderado de la parte actora, al realizar los planteamientos en torno a la fijación de la cuantía dentro del escrito de demanda, determinó lo siguiente:

“De conformidad con el certificado de salarios anexos, estimo la cuantía en (\$50.790.458) y según la siguiente liquidación

(...)

VALOR DÍAS DE RETRASO	\$44.412.782
VALOR INTERESES	\$.377.672
TOTAL ADEUDADO	\$50.790.458

(...)¹

Teniendo en cuenta lo anterior, en torno a las aspiraciones económicas legítimas que fundan las pretensiones del demandante, estimadas en **\$50.790.458**, y de conformidad con los documentos soporte de dichas pretensiones, es preciso señalar que los montos indicados superan los cincuenta (50) salarios mínimos establecidos para efectos de determinar la competencia en virtud de este factor.

En este orden de ideas, al superar la parte actora los cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes de que trata el artículo 155 del C.P.A.C.A., no es posible avocar conocimiento en el presente asunto.

El Despacho reliva que mediante providencia del 20 de abril de 2015, proferida dentro del radicado 11001-03-15-000-2014-02729-01, el Consejo de Estado se pronunció en torno a la aplicación de las reglas de competencia definidas frente al presupuesto procesal de la cuantía, ratificando que es deber del juez verificar dicho elemento al momento de admitir la demanda, señalando que son aplicables de manera preferente las disposiciones jurídicas que frente a esta materia contiene el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Corolario de lo anterior y de conformidad con lo previsto en el artículo 152 de la Ley 1437 de 2011², en virtud del factor cuantía, el competente para conocer el presente asunto es el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y por ello se ordenará su remisión a la referida Corporación.

Por lo expuesto, el Despacho,

RESUELVE

PRIMERO.- **DECLARAR QUE ESTE JUZGADO CARECE DE COMPETENCIA** para conocer del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovido por **JOSÉ MIGUEL MONROY GARZÓN**, contra la **NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN- FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO**.

SEGUNDO.- **REMITIR** el presente expediente, una vez ejecutoriado este proveído, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Reparto, por conducto de la Oficina de Apoyo, de conformidad con las consideraciones anotadas en la parte motiva.

¹ Tabla con la totalidad de liquidación se encuentra obrante a folios 26 y 27 del plenario.

² Art. 152.- Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia (...) 2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

TERCERO.- Por Secretaría déjense las constancias respectivas y dese cumplimiento a la mayor brevedad a lo aquí resuelto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ANDRÉS JOSÉ QUINTERO GNECCO
Juez

CA



**JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA**

Por anotación en **ESTADO ELECTRÓNICO** notifico a las partes
la providencia anterior hoy **26 DE NOVIEMBRE DE 2018**,
a las ocho de la mañana (8:00 a.m.)

LIZZETH VIVIANA CANGREJO SILVA
SECRETARIA